RENOCIÓN DE LA CIENCIA POLÍTICA COMO FUNDAMENTO DE LA LEGISLACIÓN Y LA JURISPRUDENCIA

Por Rafael Preciado Hernández
Director del Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM.

El problema más serio que en el orden social confronta en nuestro tiempo la civilización de occidente, consiste en lo que nos atrevemos a llamar la deshumanización de las ciencias sociales prácticas, es decir, en estudiar las conductas en la vida social como meros fenómenos regidos por leyes de causalidad, sin tomar en cuenta criterios o valores éticos. Esta actitud ha afectado y seguirá afectando tanto a la técnica legislativa como a la técnica jurisprudencial, por tener éstas su fundamento inmediato en la política y la ética social, ciencias prácticas que al ser desviadas de su objeto fundamental —el establecimiento mediante el análisis crítico de los criterios y principios éticos rectores de la conducta social—, resultan deformadas y dejan de ejercer su influencia por todos conceptos saludable y fecunda, sobre la legislación y la jurisprudencia y, por consiguiente, sobre la vida social en general.

La deshumanización de las ciencias sociales prácticas antes mencionadas, se inició en el siglo pasado con el rompimiento de la tradición predominantemente humanista, provocado tal rompimiento por el positivismo, cuyas versiones más importantes han sido hasta la fecha el sociologismo, el voluntarismo y el logicismo jurídico. Estas versiones del positivismo tienen como común denominador su carácter formal; pues aún en los casos en que hacen referencia a valores sociales, atribuyen a éstos un carácter transitorio y relativo, privándolos de permanencia y universalidad, al fundarlos en cuanto a sus contenidos en decisiones individuales subjetivas de los gobernantes, o en usos o costumbres equivalentes a meras decisiones colectivas de la sociedad, contrarias frecuentemente a los criterios y principios éticos objetivos.

Es común a todas las formas de positivismo el rechazar los criterios o valores y principios éticos, por considerarlos científicos, es decir, al margen de las ciencias. Se parte del supuesto —que no se somete a un
análisis crítico, ni por consiguiente se demuestra— de que las ciencias sociales contienen un cuerpo o sistema de enunciados sobre los fenómenos o hechos sociales y que, por tanto, las respuestas a esas cuestiones, las soluciones a tales problemas son válidas sólo en su aspecto formal, en cuanto están regidas por las reglas de la lógica: pero por lo que ve a los contenidos, las mismas soluciones o respuestas dependen de intereses subjetivos, o de los respectivos sistemas de valores o criterios éticos que son, para el positivismo, igualmente subjetivos y relativos.

El positivismo filosófico, con su actitud empírica-sensorial, supone la superioridad del conocimiento sensible respecto del racional, sosteniendo que este último procede de, y puede ser reducido a sensaciones, por lo cual se atiene rigurosamente al método que en tanto que parte de la observación de los fenómenos: el método inductivo, el que sólo conduce a establecer relaciones de causalidad, relaciones constantes entre los fenómenos.

Esta posición filosófica culmina en el neopositivismo de Ernst Mach (1838-1916), quien reduce el conocimiento científico a los hechos positivos, entendiéndolo por tales, según sus palabras: "los colores, sonidos, presiones, calores, perfumes... a los cuales damos el nombre de sensaciones, cuando dependen de circunstancias internas...; con los rastros que todas estas sensaciones nos dejan —agrega—, construimos los recuerdos, las representaciones, las voliciones, los sentimientos...".

Como hace notar Corts Grau, no cabe calificar de empírica la doctrina de quienes, sin atentar a la jerarquía entre lo sensible y lo espiritual, reivindican la función de la experiencia y propugnan el método experimental en ciertos sectores de la ciencia; ni a quienes denuncian los riesgos y errores de la mera dialéctica divorciada de la observación, y destacan el valor de la experiencia, especialmente en algunos órdenes, del saber, frente al puro logicismo o el abuso del testimonio de autoridad.

Coincidimos con Corts Grau en considerar razonable, justificada tal actitud; pues lo que se rechaza de los positivistas es la pretensión de reducir todo conocimiento científico al que es verificable en la experiencia sensible, sensorial, ya que si tal tesis fuera exacta, habría que negar la calidad de ciencias a las matemáticas y a la lógica —cosa que por una incongruencia inexplicable, no se atreven a sostener los propios positivistas— y luego a las disciplinas filosóficas y a algunas de las ciencias sociales, entre éstas a la filosofía del Derecho y a la política o filosofía del Estado.

También se rechaza la posición opuesta que limita el conocimiento

---

1 Messer, Augusto, *Historia de la filosofía*, tomo relativo a la filosofía actual, segunda parte, capítulo V, inciso 1.
científico al que se refiere a las formas a priori del pensar, a los métodos de ordenación de las impresiones, o a los juicios matemáticos; pues ambas posiciones mutilan el objeto general de la ciencia, que es toda la realidad, el orden total de lo que es dado. En este sentido tiene razón la fenomenología husserliana al afirmar que ella representa la posición positivista integral, ya que no sólo estudia los fenómenos de la experiencia sensible, sino además y principalmente los datos y formas de la experiencia espiritual, aprehendidos o captados estos últimos mediante las instituciones intelectual, emocional y volitiva.

En el ámbito de lo jurídico, es rasgo común de las tres versiones del positivismo antes mencionadas, el no distinguir sino confundir los hechos con los derechos y los deberes correlativos: el voluntarismo, al afirmar que las normas jurídicas obligan porque expresan la voluntad de los gobernantes; el sociologismo, al pretender inducir de los hechos sociales las normas correspondientes que los han de regir; y el logicismo, al sostener que lo estrictamente jurídico es el estudio de la estructura formal de la norma, no sus contenidos éticos o políticos, prejuzgando que la justicia es un ideal irracional al que no se llega por las vías del conocimiento racional, científico.

Como hace ver claramente el mismo Cortis Grau: “Si el hecho y el derecho no se diferencian radicalmente y son realidades que coinciden en un mismo plano, la obligatoriedad de la norma jurídica es indemnizable y aun pierde ésta su razón de ser. Hay verdades que preocupan a muy pocos hombres y de las que se puede prescindir prácticamente. Pero hay otras que se nos vienen con toda su imponente gravedad y urgencia: el deber, la responsabilidad, la culpa, la injuria recibida, el mal que causamos, el hecho terrible de que hayamos de someter nuestra persona a otras personas, queramos o no queramos, todo esto nos lo hemos de plantear de continuo y a veces bajo un signo trágico de vida o muerte; todo esto constituye nuestro verdadero mundo, y hay que explicarlo.”

Esto no significa que se rechace toda intervención de la voluntad en la construcción de un ordenamiento jurídico humano, rector de la vida social de un pueblo organizado como Estado. Ciertamente la intervención de la voluntad juega un papel muy importante en la elaboración de las normas y de las instituciones jurídicas. Ya lo precisaba el Aquinense, siguiendo en buena parte el pensamiento de Aristóteles, al decir: “La voluntad humana puede, en virtud de una convención común, hacer que una cosa sea justa entre aquellas que de suyo no implican ninguna repugnancia con la justicia natural. Y es aquí que hay lugar para el Derecho positivo. De ahí esta definición del filósofo (se refiere al Estagirita) en lo que concierne al derecho o lo justo legal: “que

---

3 Cortis Grau José, Filosofía del Derecho-Introducción Gnosológica, 2a. edición, Editora Nacional, España, 1944, p. 92.
antes de ser establecido, no importaba que fuera así o de otro modo, pero una vez establecido, sí importa." Por el contrario, una cosa que de suyo repugna al Derecho natural, no puede devenir justa por la voluntad humana, por ejemplo establecer que sea lícito robar o cometer adulterio."

Tiene, pues, gran importancia la voluntad humana en la elaboración del Derecho; pero bien entendido que la mera voluntad no puede ser el fundamento de un deber ni, por tanto, del derecho-facultad correlativo. Sólo cuando la decisión de la voluntad, en virtud de una convención —privada o pública— elije una solución que no repugna a la justicia, tal solución o regla es jurídica. En caso contrario será una regla social, impuesta si se quiere por medios coercitivos, mas no una norma jurídica auténtica, es decir, obligatoria. Así, se puede establecer la mayoría de edad y el acceso a la ciudadanía a los 18, 20, 21, 25 o más años; pero no se puede privar de la personalidad jurídica a algunos seres humanos por haber sido vencidos en una guerra, o por algún otro hecho similar, ni desconocer sus derechos civiles y políticos en atención al color de su piel.

La pretendida autonomía de la voluntad del legislador para crear Derecho humano o positivo, es semejante a la pretendida autonomía de los particulares para crear derechos subjetivos y los correspondientes deberes jurídicos contractuales; pues así como los contratales no pueden con su voluntad cambiar los preceptos de orden público relativos a la capacidad para contratar y obligarse, a la naturaleza y formas solemnes de los contratos, a la ilicitud de los objetos y a los vicios del consentimiento que afectan de nulidad absoluta los convenios, tampoco los legisladores pueden con su mera voluntad crear reglas sociales obligatorias contrarias a los principios de la justicia y del bien común. Debido entenderse, claro está, que carecen de ese poder de derecho, aun cuando lo tengan de hecho.

No está por demás recordar que nos venimos refiriendo a los elementos esenciales de la norma jurídica auténtica —regularidad y obligatoriedad—, no al problema de la llamada ley humana injusta, la cual, estrictamente, no es norma que obligue en conciencia, sino regla social impuesta que cabe combatir reclamando su derogación o abrogación; pero que mientras esto no se logre, hay que acatar en razón de la seguridad y demás fines éticos del Derecho, los que exigen tal acatamiento para evitar mayores males, y que en los casos de reglas sociales gravemente injustas impuestas por los gobernantes, fundan el derecho de resistencia pasiva y en casos extremos, activa y hasta violenta. Sin embargo, no es este el problema que aquí se estudia.

Los hechos, actos y opiniones no son normativos, obligatorios por sí solos, ni siquiera cuando se generalizan. Los asesinatos, los fraudes y los robos, seguirán siendo contrarios a los principios morales y jurídicos aun cuando se repitan miles y miles de veces. No son los principios, pues, los que han de subordinarse a los hechos, sino éstos, en cuanto son voluntarios, los que han de ajustarse a aquéllos. No faltan sociólogos que sostienen: los hechos se imponen, son irreformables; sí el 95 por ciento de los hombres pecan contra la castidad, de nada servirá condenarlos, la condenación no impedirá su comportamiento. Sin embargo, como hace notar Leclercq: "El robo es tan hecho como la incontinencia; ¿por qué no se concluye que hay que dejarlo libre?"  

Por supuesto que la sociología presta servicios muy importantes, tanto a la moral como al Derecho: cuando se limita a su objeto propio, sin pretender invadir los respectivos campos de las disciplinas normativas antes citadas; cuando precisa las relaciones entre las normas y los hechos que constituyen las costumbres, sin calificar a éstas de buenas o malas, justas o injustas; y también cuando señala los medios más eficaces para inducir a los seres humanos a observar los preceptos morales y jurídicos. Pero resulta muy nociva cuando trata de convertir las costumbres en normas, o que éstas se adapten, si no es que se ajustan, a las prácticas habituales.

Los deberes auténticos no se fundan en los hechos, así se trate de actos o manifestaciones de voluntad, ya sea de los particulares o de los gobernantes; ni mucho menos derivan del influjo motivador de una sanción coercitiva o de la posibilidad de ser impuesto el acañamamiento a sus mandatos por medio de la coacción. Los deberes sólo pueden encontrar racionamente en criterios fundamentales de la conducta, ya que constituyen esencialmente la necesidad que vincula determinadas acciones como conducentes a la realización de fines valiosos, a la luz de tales criterios éticos. Recordemos una vez más al Aquinatense: "La necesidad —decía— es de dos clases: primera, de coacción; repugna a la voluntad y destruye la razón de mérito; segunda, la obligación de precepto o necesidad de fin, esto es, cuando alguno no puede conseguir el fin de la virtud, a no ser haciendo esto; y tal necesidad no excluye la razón de mérito, en cuanto alguno obra voluntariamente lo que es así necesario." 6  


Lo cual muestra al mismo tiempo que en la norma jurídica no es la
coercitividad el elemento principal, como pretende Kelsen, sino el secundario; pues lo que importa ante todo es establecer un orden social obligatorio que, para serlo, tiene que estar fundado en la justicia y el bien de la comunidad; y es para mantenerlo y darle eficacia que se justifica imponerlo por medios coercitivos en los casos de inobservancia. No se establece un orden justo en la vida social para imponer sanciones coercitivas, sino que se imponen éstas para mantener y hacer eficaz la ordenación justa de la vida social.

Un ejemplo importante de sociología político nos lo ofrece Max Weber, quien entiende por política la dirección o la influencia sobre la dirección de un Estado; y a éste, como la comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. La legitimidad —según él— está basada en la legalidad, en la creencia en la validez de preceptos legales y en la competencia objetiva fundada en normas racionalmente creadas, es decir, en la orientación hacia la obediencia a las obligaciones legalmente establecidas. Toda acción éticamente orientada puede ajustarse a dos máximas distintas entre sí e irremediablemente opuestas: puede orientarse conforme a la ética de la convicción que parte de máximas aceptadas, o conforme a la ética de la responsabilidad, que ordena tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción. Sin embargo, acaba por aceptar que estas éticas no son términos absolutamente opuestos, sino elementos complementarios que han de concurrir para formar al hombre con auténtica vocación política.7

Como puede verse fácilmente, aun cuando maneja términos como legitimidad ética y responsabilidad, no los relaciona con criterios o valores, objetivos verdaderamente morales, entendido este concepto en sentido amplio, sino que todas sus explicaciones las finca en la observación de los hechos y en los modos habituales de reaccionar psicológicamente de los gobernados ante los gobernantes carismáticos. La legitimidad la reduce a legalidad y ésta a la creencia en normas creadas racionalmente; más no precisa en qué consiste la creación racional de las normas, limitándose a señalar que la obediencia de los súbditos está condicionada por muy poderosos motivos de temor y de esperanza, y junto con ellos, también por diversos intereses.

No advierte que la razón es una capacidad del espíritu que lo mismo puede elaborar reglas injustas que reglas justas o normas, y que en tales condiciones lo que importa es descubrir con la razón los criterios y principios a los cuales debe ajustarse esa actividad creadora. Lo que le interesa sobre todo es la estructura de dominación del Estado por la entrega de los sometidos al carisma personal del caudillo, auxiliado en el funcionariado moderno por un conjunto de trabajadores intelectuales al-

CIENCIA POLÍTICA, FUNDAMENTO DE DERECHO

631
tamente especializados mediante una larga preparación y con un honor estamental muy desarrollado, cuyo valor supremo es la integridad. Así que sólo nos queda elegir entre la democracia caudillista con maquinaria estamental, o la democracia sin caudillos, es decir, la dominación de políticos profesionales sin vocación, sin esas cualidades íntimas y carismáticas que hacen al caudillo. Y en cuanto a la responsabilidad, tampoco la entiende como el deber de responder de nuestros actos y de sus consecuencias buenas o malas, sino más bien como la actuación que tiene presente las consecuencias de las decisiones tomadas.

Por supuesto que por este camino sociológico no es posible llegar al objeto de una ciencia racional del orden social y humano, objeto que ya había sido alcanzado en buena parte por la metafísica griega y medieval, cuyo estudio omitió Weber. Tiene razón Voegelin al señalar esta significativa omisión y afirma: "Para degradar la política de Platón, de Aristóteles o de Santo Tomás al rango de un valor más, todo investigador consciente tendría primero que probar que la pretensión de esos autores de constituir una ciencia carece de fundamento. Tal intento fracasaría, pues cuando ese hipotético crítico hubiera penetrado el significado de la metafísica con la profundidad indispensable para hacer una crítica documentada, él mismo se habría convertido ya en un metafísico. El ataque a la metafísica sólo puede emprenderse con buena fe desde la tranquilizadora distancia de un conocimiento defectuoso." 8

En efecto, si Weber hubiese buscado sin prejuicios el fundamento de la responsabilidad —entendida no sólo como la actuación con conocimiento de las consecuencias, sino en su sentido propio, o sea como el deber de responder de nuestros actos y de sus consecuencias—, se habría visto llevado a admitir que tal fundamento se encuentra en la estructura o naturaleza del ser humano; ya que sólo el ser humano —espíritu encarnado— es capaz de actuar con conocimiento de causa y auto-determinación; que es esto lo que lo convierte en autor de sus actos; lo cual equivale a reconocer, que en la medida en que actúa voluntaria y libremente, es él la causa eficiente de sus acciones; éstas constituyen proyecciones o manifestaciones de su ser, son suyas y, por tanto, se le deben atribuir, imputar, y debe responder de las mismas y de sus consecuencias, buenas o malas, que se traducirán para el responsable en mérito o demérito.

¿No muestran y demuestran estas sencillas reflexiones que la responsabilidad presupone como un a priori real —no meramente formal— el criterio ético de la justicia, según el cual debemos reconocer a cada ser humano lo suyo, en este caso sus acciones con sus consecuencias? Probablemente Weber contestaría que esta conclusión implica una valoración subjetiva que, como tal, no es científica. A lo cual replicamos que

ciertamente la conclusión de que se trata implica una valoración, más no subjetiva sino objetiva y, por tanto, científica; pues por ciencia entende
temos todo sistema de conocimientos con validez objetiva, es decir, ver
daderos, ya sean evidentes, comprobados o demostrados, sobre cualquier sector o área de la realidad.

Por otro camino —o sea el del postulado de la pureza metódica en
que se funda y culmina la teoría pura del Derecho—, Kelsen también se empeña en separar el Derecho de la justicia, y aun cuando en su obra Sociedad y Naturaleza9 acomete el estudio, que él califica como crítico-
ideológico, del problema de la justicia, lo hace desde un punto de vista sociológico; es decir, sólo se propone y le preocupa “la investigación de
la función social de ciertas ideas (entre ellas la de la justicia) que exis
ten en el mente de los hombres y que operan como causas de su con-
ducta”. Fácilmente se advierte que la ética de la responsabilidad de
Weber y la sociología de la justicia de Kelsen, convergen en la nega-
tiva a investigar la posibilidad de una fundamentación racional de los
criterios, valores o principios éticos de lo social, que tenga validez científica.

Sin embargo, hay algo más positivo en Kelsen; pues aun cuando afir-
ma que la justicia absoluta es un ideal irracional, expresión que tiene
muy variados significados, en su atractivo estudio “¿Qué es la justicia?”10
llega a esta conclusión sorprendente: “...En realidad, yo no sé ni puedo
decir qué es la justicia, la justicia absoluta, este hermoso sueño de la
humanidad. Debo conformarme con la justicia relativa, puedo decir
únicamente lo que para mí es la justicia. Como la ciencia es mi profe-
sión y, por lo tanto, lo más importante de mi vida, para mí la justicia es
aquella bajo cuya protección puede florecer la ciencia y, con la ciencia,
la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la
paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia”.

La conclusión es sorprendente porque muestra con cierta claridad que
un análisis crítico de las nociones que relaciona Kelsen con su llamada
justicia relativa, tales como: “lo más importante de mi vida”; “protec-
ción para que pueda florecer la ciencia y con ésta la verdad y la
sinceridad”; y luego las realidades significadas con los conceptos de “li-
bertad”, “paz”, “democracia” y “tolerancia”, indudablemente conduce a
una idea de justicia con validez objetiva, universal, científica, aunque relativa; pero relativa al ser humano y a la sociedad, es decir, al orden
natural —no al sobrenatural, al cual corresponde propiamente “el ser

absoluto”—de acuerdo con nuestro conocimiento finito, limitado, condicionado.

Estas actitudes de Weber y Kelsen, obedecen seguramente a que parten del postulado positivista según el cual sólo los enunciados o juicios que se refieren al mundo de los fenómenos describiéndolos, o a sus relaciones de causalidad, constantes, son objetivos, explicativos, científicos; no así los juicios que se refieren al recto orden del espíritu o de la sociedad, los cuales son más bien comprensivos que explicativos, pues contemplan principalmente relaciones de finalidad, o de necesidad lógica o moral que, para el positivismo, implican preferencias o decisiones subjetivas no verificables críticamente.

Parece que no advierten los positivistas que si es científica la explicación como conocimiento de la causalidad que vincula los fenómenos o procesos de la naturaleza bajo las categorías de causa y efecto, con mayor razón procede calificar de científica la comprensión que representa el modo de entender a un ser o a alguno de sus elementos o estructuras en relación con su fin objetivo, con su función o desarrollo; ya que para hacerlo se apoya en la explicación y la supera.

Lo cual es cierto no sólo en lo específicamente humano, de lo espiritual, sino también en el mundo de los fenómenos; pues así como no se entiende la estructura de un órgano como elemento de un ser biológico buscando su causa fenoménica sino atendiendo principalmente a su función o finalidad, tampoco se comprende la actividad humana sino en relación con los fines que la inspiran, los cuales, al descubrir la inteligencia que no son indiferentes, los ordena en una jerarquía que al fundarse en datos objetivos, implica lógicamente una valoración objetiva. Un sencillo ejemplo ilustrará esta afirmación: a base de explicaciones se obtiene un conocimiento fenoménico de las substancias que nutren a un organismo biológico y lo conservan, así como de las que lo envenenan y destruyen; es luego mediante la comprensión que la inteligencia distingue lo saludable de lo enfermo y reconoce superioridad o valor a lo primero; viene luego el juicio del nutriólogo prescribiendo la dieta que debe observar un enfermo. Si se medita seriamente sobre el particular, se tendrá que llegar a la conclusión de que en todas las ciencias naturales y sociales siempre se mezclan, aunque en distinta proporción, la explicación y la comprensión.

Por supuesto que en las ciencias sociales lo que predomina es la comprensión: tanto la comprensión semántica, como la comprensión teleológica, como la comprensión metafísica; pero también se utiliza la explicación, la reducción de los fenómenos a sus elementos y relaciones constantes, tal como lo hace la auténtica sociología. Esto quedó suficientemente explicado al referirnos al deber de responder de nuestros actos y sus consecuencias. En efecto, ¿por qué debemos responder de nuestras acciones frente a nuestros semejantes? Porque podemos establecer median-
te una explicación que el ser humano es autor de sus actos, que éstos son proyecciones o manifestaciones de su ser, son suyos de quien los realiza; y luego comprensivamente, relacionado estos datos con el fin natural del ser humano como una anticipación del desarrollo acabado de su estructura esencial, inferimos el presupuesto o criterio axiológico de toda valoración jurídica: la justicia, entendida como exigencia de dar o reconocer a cada quien lo suyo; lo suyo, que si en ocasiones puede resultar opinable en cuanto a su contenido o determinación, en otros casos, como el que acabamos de señalar —el acto es de su autor, así como el cuerpo y las facultades espirituales son del ser humano de que se trate— ya no expresa un enunciado subjetivo sino un juicio objetivo y evidente, en el cual se fundan estos juicios de valor, igualmente evidentes y objetivos: se debe atribuir el acto y sus consecuencias a su autor, y éste debe responder de lo que hizo conciente y libremente. Es claro, pues, que la ciencia abarca, tanto conocimientos explicativos como comprensivos, con tal que unos y otros sean objetivos y no meros sentimientos, opiniones o deseos subjetivos.

Las especies y clasificaciones de las ciencias obedecen a la necesidad de limitar el estudio o la investigación a los distintos aspectos o áreas de la realidad, sin perjuicio de integrar posteriormente los conocimientos obtenidos en esas grandes síntesis del saber, que sólo con relación al hombre, representan la antropología científica y la antropología filosófica. Reducir, pues, lo científico a un determinado aspecto o área de la realidad, o al conocimiento alcanzado con un determinado método, es una actitud dogmática. Por este camino se ha llegado a la deshumanización del Derecho, al que se convierte en mera técnica de la coacción, y a la deshumanización de la política, la que se reduce a técnica del poder, al no distinguir a éste de la autoridad. Siendo evidente, como enseña Maritain, que la autoridad es el derecho de dirigir y de mandar, se ser obedecido por otro; en tanto que el poder es la fuerza con que se construye a otro, imponiéndole un determinado comportamiento. "Toda autoridad —agrega—, desde que se refiere a la vida social, demanda completarse con un poder, sin el cual corre el riesgo de ser vana e ineficaz entre los hombres. Todo poder que no es la expresión de una autoridad, es inútil. El gangster o el tirano ejercen un poder sin autoridad. Hay instituciones —en cambio—, el Senado de la antigua Roma, la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuya autoridad aparece de una manera tanto más manifiesta como ellas mismas no ejercen funciones determinadas en el orden del poder."

Esto muestra, por otra parte, que las ciencias sociales no se limitan al conocimiento de relaciones casuales típicas o al análisis estructural de...
las reglas y que, por consiguiente, no todo conocimiento comprensivo de las formas y relaciones sociales es "mera ideología". Como sostiene Kwant10: "estamos ante una ideología cuando una idea es abrazada, no en razón de su verdad y de su intensa fuerza de convicción, sino porque protege, defiende y favorece algún interés propio." Resulta así evidente que los principios éticos de imputabilidad y responsabilidad, sin los cuales no es posible construir un orden social humano, no son ideológicos sino científicos, aun cuando no se les puede reducir a meras explicaciones; pues no protegen, defienden o favorecen intereses particulares, sino que tienen validez universal.

Conviene insistir en que no rechazamos el estudio o análisis crítico de las estructuras lógicas del Derecho en cuanto implican una técnica de la coacción, según el planteamiento general de la teoría pura del Derecho; y tampoco el estudio sociológico de las técnicas del poder, según los planteamientos igualmente generales de la sociología política; lo que rechazamos es la afirmación, para nosotros infundada, de que sólo estos estudios tienen el carácter de científicos en relación con el Derecho y la política; pues aparte de que con este método se predetermina el objeto de conocimiento —siendo que es el objeto el que ha de orientar nuestra búsqueda del método adecuado—, con tal ilogismo se vacía al Derecho y a la política de los contenidos determinables de acuerdo con criterios o valores éticos, incluso a la luz de una moral natural, prescindiendo así en la reflexión sobre lo jurídico y lo político, de las importantes aportaciones de la antropología filosófica.

Con base en lo expuesto, podemos pasar ahora a precisar algunas conclusiones:

I. La ciencia, tal como la entendemos y definimos antes, no es meramente explicativa, también es comprensiva. Abarca, en su acepción genérica, las múltiples especies y clasificaciones de ciencias conocidas: fenoménicas o de la naturaleza, filológicas, abstractas o matemáticas, lógicas, psicológicas, éticas, filosóficas, sociales, históricas.

II. En el campo de las ciencias sociales, especialmente en las jurídicas, está bien que se delimiten como objetos de conocimiento científico, tanto el análisis de la estructura formal del Derecho positivo —teoría pura del Derecho o lógica jurídica—, como la investigación de la función social de ciertas ideas que operan como motivaciones de la conducta humana —sociología jurídica—; pero no cabe considerar científico sino dogmático, afirmar que los criterios o valores éticos de lo social como la seguridad jurídica, la equidad, la justicia, el bien común, son siempre objetos de opiniones subjetivas y de ideologías.

III. Es preciso renovar el estudio de la ciencia política, no para con-

servar o restaurar contenidos específicos de instituciones jurídicas y políticas caducas, obsoletas; ni para continuar cultivando o ensayando técnicas coactivas o del poder; tampoco para fomentar la creciente especialización por materias, a base de explicaciones de los hechos sociales mediante la construcción de relaciones causales típicas. El impulso renovador, sin menospreciar las aportaciones de las ciencias positivas, descriptivas o explicativas de lo social, deberá recoger y repensar los criterios o valores y principios éticos que la cultura de occidente ha descubierto y sistematizado, sin los cuales no es posible la recta y humana ordenación del Estado; y luego aplicarlos a las soluciones que proponga para resolver los múltiples y complejos problemas sociales de nuestro tiempo. He aquí una excepcional y noble tarea para los auténticos juristas de nuestra patria.